Hacia circuitos cortos de comercialización e intermediación solidaria en La Araucanía

Mensajes claves

Problemas:

- Falta de espacios de venta.
- Respuesta institucional tardía y/o limitada para garantizar la continuidad de la actividad campesina durante la pandemia.
- Principales brechas identificadas: acceso a mercados, falta de transporte, logística, excesivas normas tributarias y complejos requerimientos para obtener la certificación sanitaria.
- Brechas en política pública: prioridad a monocultivos convencionales y de exportación; la logística y comunicaciones que priorizan las escalas masivas y la macro-economía en lugar de las economías locales y el enfoque solidario; en lo organizacional, el fomento de empresas no tiene orientación hacia lo asociativo y al cooperativismo, y ,en lo comercial, la Economía Social y Solidaria no está contemplada en los modelos de fomento.

Las recomendaciones de política pública planteadas en este documento sitúan al alimento como bien esencial para la reproducción de la vida, y como objetivo para lograr un acercamiento, lo más estrecho posible, entre productores y consumidores.

Contexto

La Organización Mundial de la Alimentación (FAO) ha anunciado cifras preocupantes. A nivel mundial, un tercio de los alimentos se desperdicia al año y hay un incremento de la malnutrición del 30%. En la cumbre de la FAO en Ecuador (septiembre 2021), el discurso del director de la organización instó a mejorar la inclusión entre países y la resiliencia de los sistemas alimentarios de América Latina y El Caribe, así como incrementar en 14% la agricultura sostenible en los próximos años. La región puede ser un ejemplo para el mundo frente a los desafíos del cambio climático, la escasez de agua y el decrecimiento de la agrobiodiversidad. En dicha cumbre quedó de manifiesto que las falencias de nuestro sistema alimentario actual siguen generando estragos, como el incremento exponencial del costo de insumos, combustibles, y por ende de la alimentación. A esto se suman los eventos climáticos, la complejidad logística de transporte y la inflación mundial, generando un ambiente de incertidumbre para el aprovisionamiento de insumos para la producción agrícola, donde las cadenas de suministro y comercialización son un factor clave.

Los sistemas territoriales de América Latina y el Caribe se caracterizan por los altos niveles de concentración de la población en pocas áreas del territorio nacional. La concentración

económica y poblacional en grandes urbes provoca desigualdades territoriales, las cuales implican costos de congestión en el uso de bienes naturales y servicios e infraestructura (CEPAL 2019, p. 29). Los costos de funcionamiento de las ciudades implican el despliegue de sistemas de transporte, comunicación y aprovisionamiento cada vez más complejos y vulnerables a disrupciones como las vividas durante la emergencia sanitaria, y a menudo implican un rezago de territorios no urbanos con respecto al impulso que las economías territoriales requieren para su dinamismo. Estas brechas territoriales refuerzan la fragmentación de las sociedades de las naciones y generan brechas en la autonomía para emprender y compartir proyectos de vida compartidas por sus miembros (CEPAL, 2014, p. 53).

La subcomisión de Acceso a Alimentos de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria[1] analizó el potenciar circuitos cortos para la comercialización de productos de Agricultura Familiar Campesina (AFC), y la importancia de cooperativas para acceso a alimentos, entre otros (Radio Agrícola 10/07/22). Estas medidas buscan generar impacto en la Agricultura Familiar Campesina en Chile, que está compuesta por una población de edad creciente, escolaridad básica (CASEN, 2020) con múltiples actividades y autoempleo precario con bajos ingresos (Quiñones, 2015). A su vez, los territorios rurales según la encuesta CASEN 2017 alcanzan mayor pobreza multidimensional (37%), con respecto a los espacios urbanos (18%). Las y los productores de la AFC, habitantes de zonas rurales con brechas de transporte y digitales, enfrentan numerosos desafíos para la venta de sus productos, desde la competencia desigual con los supermercados, la falta de tiempo y espacios dignos para la comercialización de sus productos, así como las presiones para la especialización productiva. Por esta razón se hace evidente la necesidad de alianzas entre productores y consumidores a través de procesos de intermediación solidaria (que entre otras cosas son sin fines de lucro), para promover las economías locales, incrementar la agrobiodiversidad de productos de la AFC y dar accesibilidad a productos de temporada a consumidores locales.

Metodología

En el contexto del proyecto Siembra Desarrollo financiado por IDRC, el Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en conjunto con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) generaron encuentros propositivos por la Agricultura Familiar Campesina, basados en un proceso transdisciplinario que buscó comprender de manera horizontal los impactos del Covid-19 en la Agricultura Familiar Campesina e impulsar las respuestas surgidas desde los territorios, a través de propuestas de política pública y el fortalecimiento de redes de actores locales.

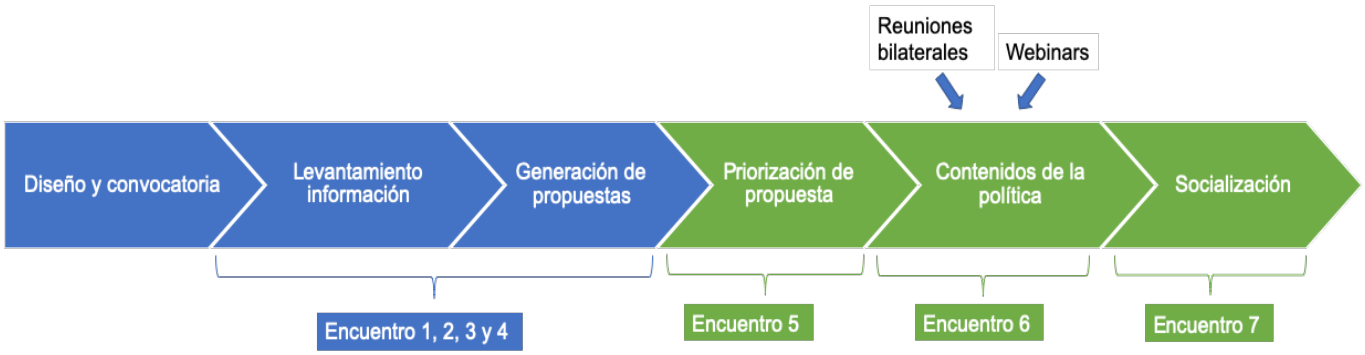
Para la ejecución de los Encuentros se conformó un Grupo de Diálogos Rurales (GDR). La convocatoria se enfocó en organizaciones campesinas y sociales, agricultores independientes,

[1] La Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria (CNSSA) inició trabajo en julio 2022 y está encabezada por el Ministerio de Agricultura, los Ministerios de Economía y Transporte. Tiene tres subcomisiones: Disponibilidad de Insumos y Alimentos; Acceso a Alimentos, y Logística (Radio Agrícola 10/07/22).

cooperativas, ONGs y funcionarios públicos. Se les contactó directamente y a través del método Bola de Nieve, para incluir a nuevos participantes. Se realizaron siete encuentros en la región de La Araucanía. Los primeros cuatro forman parte de la Etapa de Diagnóstico y tuvieron como objetivo recoger información y generar un diagnóstico sobre los efectos de la pandemia en la AFC. La información obtenida en cada uno de estos diálogos fue sistematizada y analizada, generando tres propuestas de política pública. Los tres encuentros restantes corresponden a la Etapa de Propuesta de Política Pública, en los cuales se priorizó, elaboró y consolidó la propuesta de política pública regional sobre Circuitos Cortos de Comercialización, usando como insumo lo obtenido en la Etapa anterior.

En la Etapa de Propuesta de Política Pública se ampliaron las fuentes y la información fue recogida a través de: i) encuentros propositivos; ii) reuniones bilaterales con académicos, tomadores de decisiones y cooperativas; iii) webinars con expertos. Gracias a la amplitud de actores que participaron de este proceso, fue posible recoger experiencias locales y lecciones aprendidas, necesidades, expectativas de los y las campesinas, trabajos y programas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (Figura 1). Esta matriz de información permitió establecer los contenidos de la propuesta de circuitos cortos de comercialización. El proceso se desarrolló entre marzo de 2021 y abril de 2022.

Figura 1. Metodología participativa implementada para formular la propuesta de política pública. En azul la Etapa de Diagnóstico y en verde la Etapa de Propuesta.



Hallazgos de los Grupos de Diálogo Rural

Los encuentros propositivos por la Agricultura Familiar Campesina (AFC) han permitido identificar, de primera fuente, los efectos de la pandemia en la AFC de acuerdo con las percepciones de una gama de participantes que incluyen a personas y organizaciones de campesinas y campesinos, organizaciones sociales relacionadas con la ruralidad, la agroecología y la intermediación solidaria en la región de La Araucanía. A pesar de que las problemáticas identificadas son interdependientes, éstas fueron categorizadas en dos grandes temas: producción y comercialización.

Impactos de la pandemia en la AFC

1. **Producción:** Los principales impactos referentes a la producción incluyen la dependencia y el encarecimiento y escasez de los insumos (aumento de hasta 215% en fertilizantes), desde materiales hasta las semillas, la falta de asesoría técnica durante los períodos de cuarentena, así como la respuesta tardía de los programas de subsidio a la producción frente a la pandemia.
"*... Y en cuanto a las cosas de insumos, nada ha bajado, o sea está peor. No hay nada, un cambio en absoluto. Y si hay un cambio es para peor, porque los insumos están todos caros. Yo compré sistema de riego, donde yo tenía un presupuesto desde antes de la pandemia de 160 mil pesos y me salió 320. El doble, por el mismo sistema.*" (Productora de Perquenco, 2021)
Entre 2019 y 2022, el principal fertilizante utilizado en la agricultura convencional, la urea, ha elevado su precio un 223% (FAO 2022), cifras similares de aumento para el fosfato diamónico (DAP), la roca fosfórica y el súper fosfato triple (TSP) (World Bank, 02/06/2022). Además, en La Araucanía, más específicamente, se hicieron evidentes la falta de asesoría técnica durante los períodos de cuarentena, así como la respuesta tardía de los programas de subsidio a la producción frente a la pandemia. Ésta ha impactado principalmente a las y los productores que no son parte de alguna figura asociativa, así como a miembros de pueblos originarios restringiendo puntos de encuentro, intercambio de semillas y ceremonias, y a productores que dependen fuertemente de insumos químicos externos para los cultivos.

2. **Comercialización:** Tanto en los encuentros propositivos como en la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA) realizada por RIMISP en 2020, resaltan la falta de espacios de venta, la brecha de transporte y tecnológica en el sector rural, la respuesta institucional tardía y/o limitada para garantizar la continuidad de la actividad campesina y, por tanto, el acceso desigual a permisos de desplazamiento y venta durante la crisis sanitaria. El acceso a mercados ha sido identificado como una de las principales brechas, con obstáculos como falta de transporte, logística, excesivas normas tributarias y complicados requerimientos para obtener la certificación sanitaria. Ante la precariedad provocada por las condiciones antes mencionadas, existe una falta de incorporación de nuevas generaciones a la AFC y, por tanto, de mano de obra para dar continuidad a la misma.

Estos efectos han sido intensificados por la pandemia, ya que el exceso de intermediación (con fines de lucro) acentúa los efectos de la escasez y por ende propicia el alza de precios de

alimentos. En este contexto, han emergido redes de abastecimiento popular, las mismas que a pesar de haber sido claves para el abastecimiento de circuitos cortos en el territorio durante la pandemia, no tienen el capital ni la infraestructura para escalar, pues al ser organizaciones basadas en el trabajo, el proceso de acumulación e inversión es lento. Se ha identificado la falta de políticas públicas que reconozcan el rol estratégico de las iniciativas ya existentes y apoyen adecuadamente su escalamiento. Las principales brechas señaladas por las y los participantes de los diálogos atienden a lo **productivo**, donde se prioriza el cultivo convencional y de exportación; la **logística** y **comunicaciones** priorizan las escalas masivas y la macro-economía en lugar de las economías locales y el enfoque solidario; en lo organizacional, el fomento de empresas no tiene orientación hacia lo asociativo y al cooperativismo, y lo **comercial**, la Economía Social y Solidaria no está contemplada en los modelos de fomento.

Con respecto a los procesos de formalización, en entrevistas con personal de SERCOTEC manifiestan que las y los usuarios no participan de los espacios disponibles para la formalización. A pesar de existir diversos instrumentos que lo permiten e instrumentos que lo co-financian (por ejemplo, la Ley de Microempresa Familiar, la Sociedad por Acciones, la Individual de Responsabilidad limitada), estos mecanismos serían poco aprovechados. Un aspecto importante para profundizar es por qué estos instrumentos no son atractivos para la AFC.

3. **Problemáticas transversales:** La pandemia ha hecho más evidentes e incluso acentuado problemáticas que son transversales, como el cambio climático, inequidad en el acceso al agua, la violencia cultural y la brecha de género. Para las mujeres, los efectos de la pandemia han incrementado su carga de trabajo, teniendo que enfrentar mayor precariedad laboral e, incluso, mayor violencia doméstica. Otros efectos incluyen la falta de redes de abastecimiento popular que acentúan los efectos en la escasez y alza de precios de alimentos en general. Dentro de las problemáticas previas presentes en los territorios que han sido acentuadas con la pandemia se encuentran la pérdida de diversidad productiva, como parte de las externalidades socio-ambientales de la salmonicultura y la insularidad en Chiloé (Tabla 1).

Respuestas desde la AFC para enfrentar la pandemia en La Araucanía

A pesar de que la pandemia ha impactado la seguridad y autonomía alimentaria local, ésta también ha hecho evidentes las fortalezas de la agricultura familiar campesina para hacer frente a esta y otras crisis actuales (RIMISP, 2021). La diversificación productiva, la reactivación de la huerta, la recuperación de formas tradicionales de manejar el suelo y la reactivación local y regional de redes de semillas y de productores-consumidores, son algunas de las respuestas emergentes desde los territorios para hacer frente a la crisis sanitaria (Figura 2). Las respuestas frente a las restricciones de movilidad y el aumento de los precios de los insumos resaltan la importancia de los circuitos cortos de comercialización, así como de los procesos de intermediación solidaria.

Figura 2: Respuestas surgidas desde la AFC para hacer frente a la pandemia.

PRODUCCIÓN	COMERCIALIZACIÓN
Sustitución de insumos industriales por productos tradicionales (e.g. fertilizantes)	Ventas a través de cooperativas (e.g. Comercializadora Manos de Vuelta, Cooperativa Malalwe)
Mantener intercambios de semillas virtuales (Red de Economías Territoriales del Wallmapu)	Asociatividad en la comercialización
Poner de manifiesto la necesidad de migrar hacia prácticas agroecológicas	Sistema de canastas generando alianzas con consumidores
Priorizar cadenas cortas de comercialización e intermediación solidaria para la biodiversidad	Generación de un sello ético local, para que en un circuito corto se conecten productores, distribuidores y consumidores
Colectar agua de lluvias y optimizar el recurso hídrico al máximo	

Contexto de comercialización en circuitos cortos y economía social solidaria

"Los circuitos cortos de comercialización con base en la ES (Economía Solidaria) permiten establecer una relación económica más equilibrada entre las partes, desarrollar una dimensión educativa-transformadora, favorecer la producción local (y la biodiversidad) y propender a la eliminación progresiva de los intermediarios, disminuyendo la huella de carbono de la comercialización y valorizando lo que históricamente el territorio ha producido como patrimonio biogenético" (Saravia, 2020).

Aunque tiene sus raíces en Europa, la Economía Social o Solidaria en América Latina está vinculada con movimientos y prácticas con sentido colectivo y popular que corresponde a comunidades específicas (cooperativas, barrios, familias rurales, clase obrera, pueblos originarios, etc.) que buscan hacer economía basada en la solidaridad y el trabajo (Razeto, 1999). Para Coraggio (2014), la Economía Social o Solidaria podría ser representada como un sistema mixto, donde los sectores público y privado forman una parte igual de importante que la economía popular y cuyas sinergias son necesarias para enfrentar una diversidad de desafíos (Figura 3).

Figura 3. Esquematización de la economía solidaria según Coraggio, 2014 (Morales Peillard y García Bernal, 2020).

Los circuitos cortos de comercialización han surgido como una respuesta para las economías territoriales y hacen referencia a un canal basado en la venta de productos de temporada reduciendo al mínimo la intermediación entre agricultores y consumidores. De esta forma, el objetivo es que las y los consumidores puedan pagar precios menores al evitar los costos extra de transporte e intermediación; al tiempo que las y los agricultores obtienen un precio mejor al reducir el tamaño de la cadena de intermediarios. Otros objetivos incluyen dinamizar las economías locales, incrementar la agrobiodiversidad y calidad de los productos consumidos en las ciudades, así como la concientización de los consumidores (RIMISP 2015, p. 5).

De acuerdo con RIMISP (2015), los circuitos cortos predominantes en Chile son estrategias de comercialización de alimentos por parte de productores con capacidades limitadas de formalización e inversión y que a su vez pueden ofrecer precios más bajos, manteniendo una clientela sensible a las variaciones de precio. Este tipo de comercialización en circuito corto sostiene las economías territoriales, cuya importancia fue evidente durante la crisis provocada por la pandemia. Ante las limitadas oportunidades de comercialización debido a las brechas de transporte y la precarización de los espacios de comercialización, los procesos de intermediación solidaria y las asociaciones de consumidores se han consolidado como respuestas desde los territorios. La incorporación de colectivos de productores articulados a procesos de intermediación solidaria ha generado alternativas para obtener precios más justos y mantener volúmenes de venta más constantes.

Se identificaron diversas iniciativas locales de circuitos cortos de comercialización que incluyen a De la Puebla a la mesa, iniciativa de las mesas de mujeres rurales de las comunas de Los Sauces, Lumaco, Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Toltén, Teodoro Schmidt y Pitrufquén; sin embargo, esta iniciativa no pudo tener continuidad debido a que el financiamiento sólo duró seis meses. En las comunas de Temuco, Padre las Casas, Toltén y Curarrehue, ha logrado consolidarse la comercializadora Manos de Vuelta con distintos financiamientos a través de diversas etapas. En las comunas de Villarrica, Cunco, Pucón y Curarrehue están las iniciativas "Circuito Corto" y Red de Economías Territoriales Wallmapu. En el sector sur del Lago Budi, las comunidades de Llaguepulli, Allipen, Malalwechanko están asociadas en la cooperativa Malalwe y en Budi Folo cubriendo la comuna de Puerto Domínguez y Teodoro Schmidt. En el marco del proyecto SIPAN de la cordillera Pehuenche, actualmente se están piloteando iniciativas de comercialización en circuito corto para 12 emprendimientos de Curarrehue, Melipeuco y Lonquimay. Todas estas iniciativas tienen como base en las redes y confianzas territoriales, por lo que los procesos son de largo plazo.

Estas iniciativas son caracterizadas por su marcada pertinencia territorial, también están trabajando en la transición agroecológica, la diversificación de la producción, la democratización de los espacios de comercialización y el reconocimiento de la diversidad de las economías en la región. En dichas experiencias se evidencia que la alianza entre productores y consumidores locales, facilitadas por la intermediación solidaria, disminuye la incertidumbre para las/os agricultores a través de la estabilidad en las ventas, a la vez que genera un proceso de sensibilización hacia los consumidores. En el mediano plazo, este sistema ha promovido relaciones de confianza, donde las y los agricultores también recuperan su capacidad de innovar y experimentar con la recuperación y diversificación de cultivos ante la reducción de la incertidumbre para la AFC.

Los procesos de circuitos cortos de comercialización tienen como base las redes sociales, y el modelo requiere de flexibilidad para incluir a una amplia diversidad de actores, productores y consumidores, de tal manera que toda la cadena de abastecimiento esté contemplada. En particular, la intermediación solidaria incide en el proceso de establecer un valor en dinero según diferentes criterios y contextos a los bienes intercambiados, que excede el enfoque reduccionista de la oferta y la demanda de la economía convencional. En la intermediación solidaria, las entidades intermediarias articulan la construcción del precio entre la diversidad de partes de la red, el origen de los productos, los vínculos intersubjetivos y las motivaciones ideológicas (Dziencielsky y Laborda, 2020). La lógica desde la cual opera la intermediación solidaria atiende al planteamiento de la economía social y solidaria. De esta manera, el proceso de intermediación funciona como un intermediario necesario, pero cambia la lógica en la que opera la comercialización, al otorgar un servicio que organiza y da identidad a las redes territoriales, y que al llegar al escalamiento se torna económicamente viable. Si bien las entidades intermediarias no tienen fines de lucro (tampoco de pérdida), estas iniciativas requieren de inyección de capital para evitar el desgaste del trabajo voluntario y poder escalar. En el caso de la comercializadora Manos de Vuelta, las y los productores acuerdan en conjunto con los consumidores el precio de una canasta de alimentos. El vínculo simétrico disminuye la

carga laboral de las y los productores, reduce la incertidumbre, promueve la diversidad de los agroecosistemas y la democratización dentro de redes de apoyo (Figura 4).

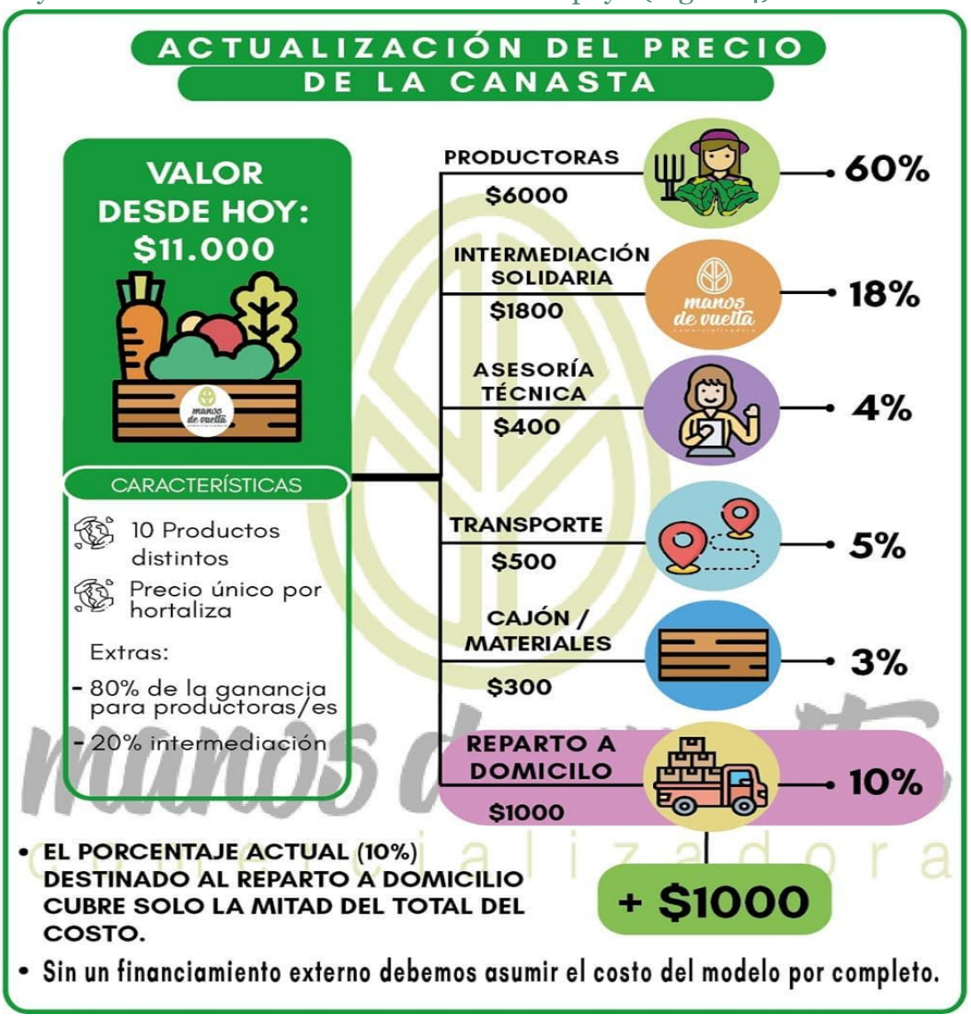


Figura 4. Definición del precio en la cooperativa Manos de Vuelta.

Recomendaciones para una política pública

Para la implementación de la política pública en La Araucanía se propone utilizar como base, a los territorios funcionales de RIMISP (Berdegué et al., 2012) que constituyen uno de los intentos más sistemáticos de analizar las dinámicas socioeconómicas al interior y entre comunas, ciudades y territorios rurales en Chile. Estos territorios se entienden como un conjunto continuo de comunas dentro del cual sus habitantes se desplazan para trabajar, comprar, resolver trámites, estudiar, asistir a establecimientos de salud de mayor complejidad, entre otros. Para el caso de La Araucanía, se consideran 10 territorios (Lumaco, Carahue, Galvarino, Cholchol, Teodoro Schmidt, Nueva

Imperial, Temuco, Villarrica, Loncoche, Cunco) los que son interesantes de repensar analizando las dinámicas, flujos, población, vocación actual de los espacios tanto urbanos como rurales, así como considerar que la "territorialidad comercial" puede ser distinta a la territorialidad agroecológica.

La propuesta consiste en un plan de promoción de circuitos cortos de comercialización para la agrobiodiversidad, que permiten el acercamiento de productores y consumidores en sistemas que tienen como base el alimento y las redes territoriales, que reducen la especulación y la incertidumbre es compartida a través de principios de economía solidaria y relaciones de confianza. Debido a que los procesos desarrollados en las propuestas son de mediano y largo plazo, se propone un plazo de pilotaje de tres a cuatro años para acompañar a los procesos desde el diseño hasta su escalamiento.

Al culminar esta etapa de pilotaje, se propone que la región cuente con un sector autónomo de intermediación solidaria con base en la agrobiodiversidad, que acompañe la réplica y adaptación de la experiencia de intermediación solidaria, como por ejemplo la de la comercializadora Manos de Vuelta de la Cooperativa Trabajo Vivo, en al menos cuatro territorios funcionales de la región. Al final de este pilotaje, este sector habrá generado incidencia para la implementación de sistemas tributarios, sanitarios y organizativos diferenciados para la AFC. A su vez, este proceso requiere ser apoyado por un sector de consumo consciente creciente en la región y con espacios de comercialización dignos en cada territorio funcional, mientras que los esfuerzos colectivos que así lo consideren pertinente tendrán el espacio para generar sus propios procesos de certificación participativa con base en la confianza y los procesos de transición agroecológica y formas de producción que consideren pertinentes para su contexto (Ver Anexo 1 para mayor detalle).

La implementación de estas recomendaciones requiere de la comunicación y el liderazgo de una mesa intersectorial regional encabezado por la SEREMI de Agricultura de la región con la participación de las oficinas regionales de INDAP, SAG, CONAF, CORFO, SERCOTEC y Ministerio de Medio Ambiente, así como de CONADI para garantizar la pertinencia cultural, mientras que las municipalidades actúan como articuladores del proceso de intermediación. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) podría vincular aquí a sus usuarios que comienzan a generar excedentes de venta. Esta mesa, tendría entonces la posibilidad de asignar presupuestos para el impulso de este proceso. Si bien la participación y financiamiento institucional son clave para la implementación de la propuesta, cabe resaltar que la conformación del sector de intermediación solidaria estará constituida por instancias autónomas territoriales.

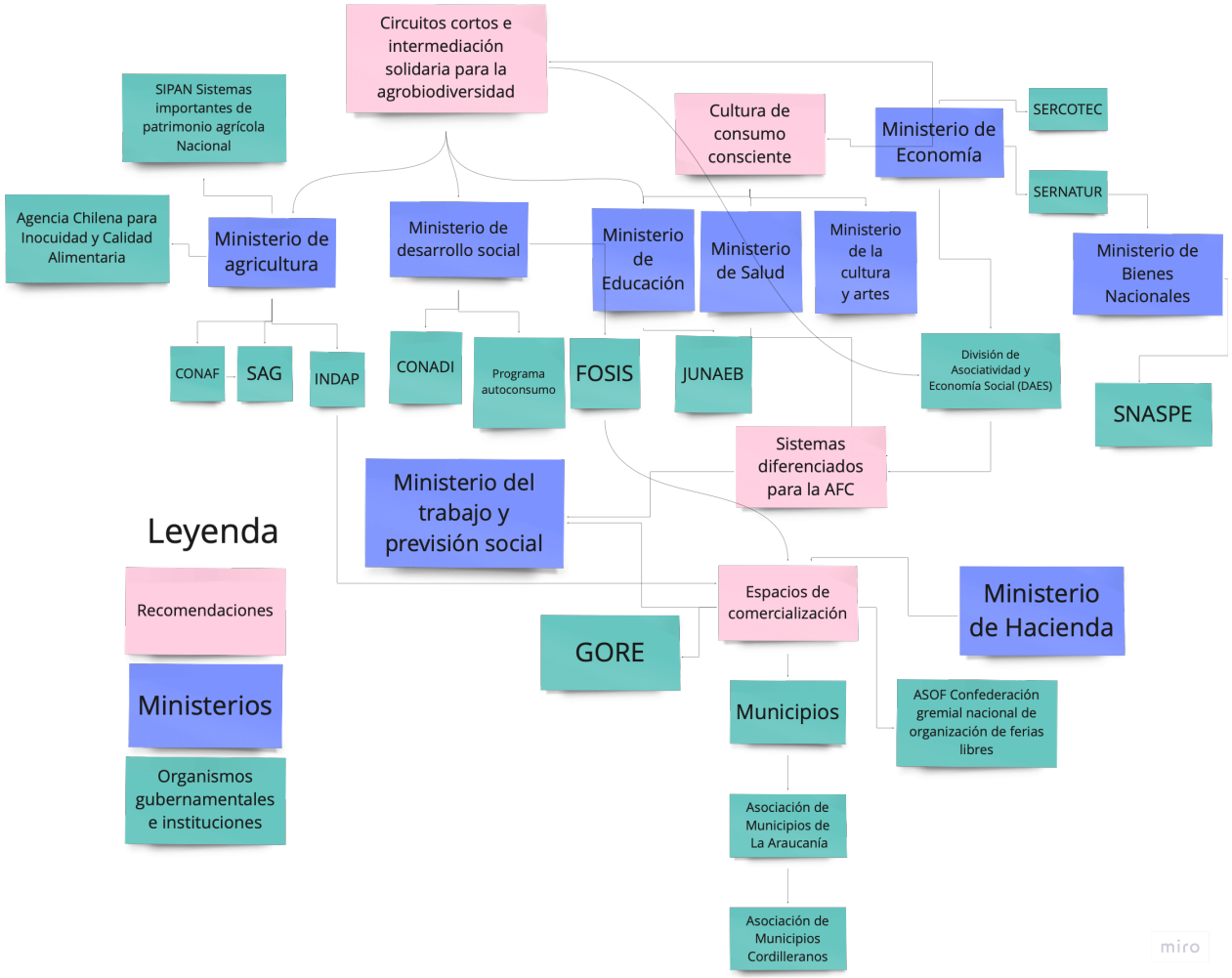


Figura 5. Propuesta de articulación de instituciones para la consolidación de la comercialización en circuitos cortos en la región de La Araucanía

A continuación de plantean las recomendaciones que tienen como fin impulsar y fortalecer los circuitos cortos de comercialización en la región de La Araucanía. Se proponen cuatro medidas interdependientes e intersectoriales:

Recomendación 1: 1.Intermediación solidaria para la agrobiodiversidad

El objetivo es relevar el sector de la intermediación solidaria como un sector económico para potenciar la generación de circuitos cortos, facilitando la constitución o conformación de un sector autónomo de comercialización y distribución solidaria que articule y fortalezca los procesos de organización de comercializadoras de intermediación solidaria en sus diferentes etapas: incubación, pilotaje, escalamiento, plataformas digitales, transición agroecológica, recuperación de la agrobiodiversidad, etc.

Este sector requiere de apoyo financiero, infraestructura, herramientas y coordinación intersectorial para su conformación. Puede actuar como eslabón productivo entre organizaciones, gobierno, consumidores e intermediadoras solidarias aportando la perspectiva hacia la agrobiodiversidad. Es necesario caracterizar y generar apoyo en recursos, tanto organizacional y de fortalecimiento de capacidades a las intermediadoras y sus miembros en las diferentes etapas del proceso, incluyendo la incubación, la planeación productiva en sus distintas escalas, la caracterización de la demanda, la sistematización de información de datos a nivel predial para procesos de planeación, la generación de redes logísticas, la sistematización del modelo y crecimientos. En dichas iniciativas, la transparencia y la horizontalidad son los pilares para el establecimiento de precios y la participación de las y los miembros de intermediación solidarias. Estas iniciativas deben ser congruentes con los modelos territoriales de cada lugar.

La mesa regional de trabajo intersectorial requiere de la participación de las representaciones regionales de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura (MINAGRI), División de Asociatividad (DAE) del Ministerio de Economía y del Gobierno Regional (GORE) para garantizar los recursos económicos a través de Fondos de Desarrollo Regional (FNDR). El Programa de Asociatividad Económica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través de Prodesal y Programa de Desarrollo Agropecuario (PDTI) requiere ser reformado para acompañar desde la lógica cooperativa y agroecológica iniciativas de intermediación solidaria (espacios donde productor-comercializadora-consumidor son corresponsables solidarios de la cadena de valor de los productos) durante todas las etapas del proceso, hasta el nivel de autonomía, considerando dos años de proceso de incubación que permita afianzar los procesos asociativos, alcanzar balances de producción, generar excedentes e impulsar procesos de transición hacia prácticas agroecológicas y con mayor agrobiodiversidad. El recién anunciado Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo tiene aquí un campo de acción definido.

Se proponen 2 iniciativas piloto que integren todas las escalas con casos heterogéneos (sociales, culturales) para pilotear un periodo de dos años. Estas iniciativas incluyen una red campo-ciudad a través de una comercializadora solidaria y otra red de circuito corto de comercialización en territorios indígenas, por lo que representan la diversidad de iniciativas de la región y tienen experiencia acumulada. De igual forma, las personas que los componen están dispuestas a la colaboración para la implementación de esta propuesta de manera autónoma:

- Comercializadora Manos de vuelta (Temuco, Cholchol, Cunco, Padre Las Casas y Curarrehue). El proceso de creación de un sector de intermediación solidaria con base en la economía social y la agrobiodiversidad ya fue comenzado el año 2020 con la iniciativa de la cooperativa Trabajo Vivo. Esta iniciativa está siendo escalada en la etapa de incubación por la iniciativa SIPAN en Curarrehue. Es significativo potenciar su impacto a nivel de toda la región de La Araucanía como parte de la implementación de este grupo de propuestas.
- Apoyo Mutuo-Rekvlvwun (Lago Budi): Área de Desarrollo Indígena con componente participativo, tiene una trayectoria de diez años fortaleciendo los vínculos de economía territorial.

Recomendación 2: Cultura de consumo consciente

En paralelo a la promoción de cadenas cortas, es necesario contar con un programa regional de generación de cultura del consumo, cuyo objetivo es la sensibilización entre consumidores rurales y urbanos para la alianza con productores locales para ejercer el derecho a una alimentación sana, apropiada, limpia y cercana. Esta alianza también busca reforzar los elementos de identidad de las y los productores como un atributo asociado a la producción.

La generación de sinergias entre productores-comercializadoras-consumidores requiere de la formación educativa de consumidores acerca de su rol en los procesos producción, distribución y comercialización. Los ministerios de Salud y Educación, desde programas como Elige vivir sano, y Junaeb, serían los responsables de generar campañas y espacios de comunicación que visibilicen la importancia de la vinculación entre productores, comercializadoras o asociaciones de consumo y consumidores, a través de encuentros basados en transparencia y solidaridad.

Es necesario generar estrategias diferenciadas según el público, considerando accesibilidad para el consumo masivo, y otros con mayor agencia. Se propone que el GORE a través de la Estrategia de Fomento y Sustentabilidad del FNDR incentive la reincorporación de alimentos con pertinencia territorial que produce la AFC en las dietas de las nuevas generaciones requiere de educar el gusto y sensibilizar los paladares a través de los programas de alimentación escolar provistos por Junaeb. De igual forma, es necesario reincorporar la noción de la estacionalidad

de la producción agrícola para generar patrones de consumo coherentes con la misma. La cultura de consumo consciente enfatizará las formas de producción de la AFC, estrechando los lazos entre los entornos del gradiente urbano-rural, incentivando la transición agroecológica, la agrobiodiversidad y la identidad territoriales, introduciendo la noción de corresponsabilidad dentro de los sistemas de abastecimiento, intermediación y comercialización. Se articulará además con la transmisión del conocimiento culinario.

Esta estrategia deberá vincular los programas nacionales de consumo consciente con una escala local de comercializadoras del territorio. Se sugiere que el sistema alimentario escolar de JUNAEB introduzca productos de la AFC, flexibilizando su sistema de compras públicas existente. Se recomienda enfáticamente emplear los medios masivos de comunicación para concientizar y promover el consumo de los alimentos que provee la AFC y la biodiversidad del patrimonio agroalimentario entre los diferentes sectores de la población.

A partir de la generación de una masa crítica de consumidores conscientes y según las necesidades y prioridades de las redes locales de abastecimiento, se recomienda a INDAP diversificar sus mecanismos de certificación para permitir el desarrollo de mecanismos de garantías participativas que visibilicen la forma de producción, la procedencia, la asociatividad, el precio justo, la equidad de género, etc. en sistemas que incentiven la confianza, la asociatividad y la autogestión. Los sellos o certificaciones deben estar asociadas a los circuitos de producción-distribución. A modo de contribuir a esta cultura consciente se propone la generación de sellos locales, territoriales y participativos que promuevan el cómo fue producido y comercializado el alimento, sensibilizando y visibilizando el ciclo existente detrás de los alimentos.

Recomendación 3: Sistemas diferenciados para la AFC

Es necesario el reconocimiento de la diversidad de economías territoriales e inclusión de la Agricultura Familiar Campesina en sistemas de formalización diferenciados: tributarios, sanitarios y de asociatividad (por ejemplo, un programa de sensibilización y acompañamiento para promover y fortalecer la asociatividad entre productores; que los productores locales puedan ser proveedores de la alimentación escolar y de empresas de sus comunas).

Se propone que otra de las tareas del recién anunciado Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo[2] sea articular la mesa regional para que pueda hacerse cargo de caracterizar la diversidad de circuitos cortos presentes (mapa de actores, productos, precios) y con potencial en la región (territoriales, espacios de comercialización local, cadenas cortas campo ciudad, etc.). Concesiones para que las y los productores de la AFC accedan a esquemas colectivos de

[2] Este instituto está proyectado por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía para el primer semestre de 2023.

certificación tributaria y sanitaria. Para implementar esta iniciativa hace falta identificar la Unidad de Intervención adecuada para favorecer la asociatividad, ya sea familias, colectivos, cooperativas, asociaciones, etc. De igual forma, se recomienda que el pilotaje de esta recomendación tenga la formalización como culminación en lugar de punto de partida.

Adicionalmente, se hace necesario mejorar el acompañamiento y adecuar las medidas sanitarias en cuanto a infraestructura. En esta instancia, INDAP actúa como articulador y fiscalizador, generando un programa de inversión en procesos sistémicos a través de instrumentos como un Sistema Regional de Comercialización Inclusivo.

Recomendación 4: Espacios de comercialización

Las municipalidades, a través de sus instrumentos normativos como el Plan Regulador Comunal (PRC) y el indicativo como Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) deberán actuar como articuladores. Se recomienda que el Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, que está a cargo de la provisión de servicios de infraestructura en todas sus etapas, sea quien garantice líneas de inversión en infraestructura para el establecimiento y mantenimiento de espacios dignos, limpios, con instalaciones sanitarias y accesibles para la comercialización directa en municipalidades de productos de la AFC.

Además, se recomienda que INDAP y las municipalidades tengan el rol de potenciar los mercados locales y/o nodos (puntos de venta) por ej. Casa de los agricultores y espacios comunes en la comuna, así como facilitar la emisión de permisos de espacios de venta y democratizar los espacios públicos.

En lo que respecta al transporte, a través de la alianza entre INDAP y municipalidades con subsidio de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la División de Transporte Público Regional, existe el potencial de generar opciones de transporte para las y los productores considerando los horarios de funcionamiento. Empleando los recursos ya existentes de las unidades de desarrollo municipal de cada localidad, puede atenderse la actual brecha de transporte para la AFC identificada en los GDR: "*La micro llega a las 10 am al centro urbano y ya a esa hora los revendedores de productos de cadenas más largas han abastecido al pueblo.*" (Productora de Melipeuco)

Agradecimientos

Agradecemos profundamente a las campesinas, campesinos, profesionales, organizaciones participes de los grupos de diálogo rural.
Cooperativa Trabajo Vivo a través de su Comercializadora Solidaria Manos de Vuelta; Mongelechi Mapu; Apoyo Mutuo-Rekvlvwun

Referencias

Berdegué, J.; Jara, B.; Fuentealba, R.; Tohá, J.; Modrego, F.; Schejtman, A. y Bro, N. (2011). "Territorios Funcionales en Chile".Documento de Trabajo N° 102. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. RIMISP, Santiago, Chile.Hobbs, J.E. 1997. Measuring the Importance of Transaction Costs in Cattle Marketing. American Journal of Agricultural Economics, 79 (4): 1083-1095.

Dziencielsky V. y Laborda, V. (2020). El valor de la intermediación solidaria. Revista Idelcoop (232) https://base.socioeco.org/docs/el_valor_de_la_intermediacion_solidaria.pdf

López, D. (2013). Circuitos cortos de comercialización para alimentos ecológicos: Nuevas formas organizativas para conectar producción y consumo en el mercado interior. Mundo Rural de Tenerife, 13, 24-27. https://bit.ly/2XB3XjI

Mauleón, J. (2001, 28 octubre). Los canales cortos de comercialización alimentaria como alternativa de los pequeños agricultores ante la globalización: el caso español. In XXIII Congreso de la Asociación Latino Americana de Sociología, Guatemala. https://bit.ly/30n7Hr5

Radio Agricultura (2022, 10 julio). Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria avanza en detectar oportunidades para fortalecer disponibilidad de insumos. https://www.radioagricultura.cl/nacional/2022/07/10/comision-nacional-de-seguridad-y-soberania-alimentaria-avanza-en-detectar-oportunidades-para-fortalecer-disponibilidad-de-insumos/

RIMISP (2015). Agricultura familiar y circuitos cortos en Chile: Situación actual, restricciones y potencialidades. Informe final. Odepa. https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2015/04/Agriculturafamiliar.pdf

Sevilla, E. (Ed.). (2012). Canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía. (Informe IF014/12). Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces. https://bit.ly/3cxpU7H

Soler, M., & Pérez, D. (2013). Canales cortos de comercialización alimentaria en la construcción de sistemas agroalimentarios alternativos. En M. Cuélla, A. Calle, & A. Gallar (Eds.), Procesos hacia la soberanía alimentaria: perspectivas y prácticas desde la agroecología política. Icaria Editorial.

World Bank (2022, 02 junio). World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet). https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-June-2022.pdf